PARADOJAS TECNICO-LEGALES

En los últimos meses asistimos a un intenso debate social sobre el estado de la investigación en España al hilo de la reforma de la Ley Universitaria actual. Mientras la administración hace oídos sordos, organismos internacionales como la Unión Europeo y la OCDE (Organización Europea de Cooperación y Desarrollo) alertan sobre la escasa inversión de España en I+D y la falta de personal dedicado a esta tarea, comparando nuestra situación con la media europea. Estos datos son preocupantes, pues es indudable que en una sociedad desarrollada el avance cultural y científico es un indicador seguro del grado de bienestar del que disfrutan sus ciudadanos.

Un elevado porcentaje de la producción científica de nuestro país se realiza por un colectivo heterogéneo, que podríamos denominar como **Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento** (PIFP). Estas personas, que constituyen en algunos organismos como el CSIC el 50% de su personal investigador, realizan su labor siendo remunerados mediante una beca. Los becarios, además de realizar su labor como investigadores, pueden incluso llegar a realizar trabajos laborales encubiertos como docentes, o meras tareas administrativas, llegando al extremo de ser empresas privadas de I+D las receptoras del PIFP. En este caso el PIFP apenas recibe formación y entran en la disciplina laboral de la empresa en la cual realiza su labor productiva, como si de un empleado más se tratara. Pero pese a todo, este trabajo sigue sin considerarse productivo.

El PIPF, en la mayoría de los casos, es considerado como un estudiante y recibe una beca, incluso cuando algunas de ellas son puestos de trabajo encubiertos, sin conllevar ningún tipo de formación para el becario. Esta falta de reconocimiento lleva asociada la ausencia de los derechos mínimos que cualquier trabajador tiene garantizados, esté o no en formación, siendo la situación de este colectivo en la mayoría de los casos irregular, o cuando menos ilegal, pero en cualquier caso, precaria.

Ante esta situación de irregularidad, la Federación de Jóvenes Investigadores/ Precarios ha recopilado algunas de las incoherencias legales de entre las convocatorias de la multitud de becas existentes, y las ha reunido bajo el nombre de Paradojas Técnico-Legales. Pensamos desde la Federación que esta medida servirá para poner de manifiesto la falta de uniformidad de las becas y las irregularidades de las que sus convocatorias adolecen, así como para reivindicar la regulación del PIFP como trabajadores de pleno derecho.

El presente documento pretende poner de manifiesto la amplia variedad de becas ofertada por multitud de organismos públicos o privados, y la ausencia de un organismo nacional que regule y homogenice las condiciones de las becas, y que evite que el PIFP se encuentre en una situación de indefensión ante su director de tesis. Por otro lado se refleja la incoherencia de la consideración del PIFP como estudiante, cuando a menudo es tratado y realiza tareas asociadas a un trabajador.

Paradojas Técnico-Legales

El caso más claro de esta doble consideración, estudiante o trabajador, es la catalogación de la cuantía de las becas como Rendimientos Netos del Trabajo. A pesar de que las becas están recogidas en diversas convocatorias como ayudas al estudio, la Agencia Tributaria considera que el dinero que recibe el PIFP proviene de la realización de un trabajo, y como tal lo computa. Esto, sumado al hecho de que ningún organismo dador de becas informa al PIFP de las retenciones que van a sufrir, lleva a

que éste no sepa a qué atenerse ante posibles reclamaciones en la Agencia Tributaria. Según la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ninguna beca conlleva encuadramiento en materia de Seguridad Social, y por tanto, no genera la obligación de cotizar por tratarse del abono de gastos para manutención del estudiante y no propiamente de abono (contraprestación) por la prestación de un trabajo profesional. Sin embargo, estas personas no son consideradas estudiantes en los centros en los que desarrollan su actividad investigadora, sino trabajadores.

La posesión de algunas becas es incompatible con la inscripción en el INEM, hecho totalmente ilegal si el becario es considerado un estudiante. Cabría deducir de esto que el becario es tratado como un trabajador, pero esto no se refleja en los derechos que debería poseer como tal.

Más datos que apuntan a que los organismos que conceden las becas sí que consideran como trabajo la labor realizada por el PIFP son, la posibilidad ofrecida por algunas becas de disfrutar *bajas* por maternidad, y la estimación de un mínimo de 40^h semanales como *jornada laboral* de los becarios. Ninguna de estas dos medidas se justifica fuera de una relación patrón-obrero, pues ni los parados tienen derecho a bajas por maternidad ni los estudiantes tienen jornada laboral.

La justificación más ampliamente difundida por los organismos convocantes sobre la imposibilidad de sustituir las actuales becas por contratos, es el carácter eminentemente formativo y no productivo de la labor realizada por el PIFP. Esta dudosa justificación cae por su propia base, cuando las mismas instituciones que alegan esto, consideran este periodo como productivo en las ofertas de plazas para la contratación de profesorado, en la evaluación investigadora del personal o en vistas a la revisión de los complementos de Investigación en el sueldo del personal investigador. En el caso de los becarios postdoctorales, que han obtenido el título de doctor gracias a los trabajos realizados durante varios años anteriores al disfrute de su beca, el carácter formativo de este tipo de becas no es justificable bajo ningún concepto.

Así, el PIFP se encuentra con situaciones tan injustas dentro de su convocatoria de beca como: becas de 11 meses en las que el becario no recibe remuneración en el mes de inactividad (léase, de vacaciones), obligación para el PIFP del pago de un seguro privado de accidentes laborales o la incompatibilidad de impartir docencia remunerada mediante contrato legal, pero la posibilidad de colaborar impartiendo créditos prácticos dentro de su departamento universitario, los cuales solo le reportarán una certificación de las prácticas realizadas. Si bien esto podría estar justificado dentro del subprograma de becas para la Formación de Profesorado Universitario que desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo es preparar docentes universitarios, en el resto de convocatorias de Becas para la Formación de Personal Investigador que otras instituciones ofertan no se debería contemplar la posibilidad de impartir docencia sin remuneración.

Finalmente recalcar que la única finalidad de muchas becas es la realización de trabajos a bajo coste para la institución y alta precariedad para el becario, que una vez más no tiene ningún organismo independiente que regule ni controle su situación.

Conclusión

Así, vistos y demostrados los objetivos que nos han decidido a la elaboración de esta recopilación, y sopesándolos objetivamente, este documento conlleva irremediabilmente a la petición hacia todos los organismos convocantes, de que se replanteen su política futura, contemplando la posibilidad de sustituir el actual sistema

de becas por un sistema de contratación, acorde a la consideración de trabajadores de la que hacen gala en sus convocatorias y que la labor y producción del PIFP justifica plenamente para la mayoría de los casos.

La contratación del personal dedicado a la investigación en este país sería un importante, innovador y necesario paso en el diseño de la carrera investigadora, que eliminaría la precariedad laboral de gran parte de los recursos humanos dedicados a la investigación. Esto, obviamente, deberá ser consensuado por todos los estamentos implicados, y deberá tener un marco legal propio, complementario al que actualmente refleja la Ley del Trabajo, debido a las características especiales que tiene la labor investigadora. De esta manera, se eliminarán la amplia variedad de injusticias a las que el PIFP se encuentra sometido en la actualidad.